

RESUMEN DEL IMPACTO DE LA CRISIS

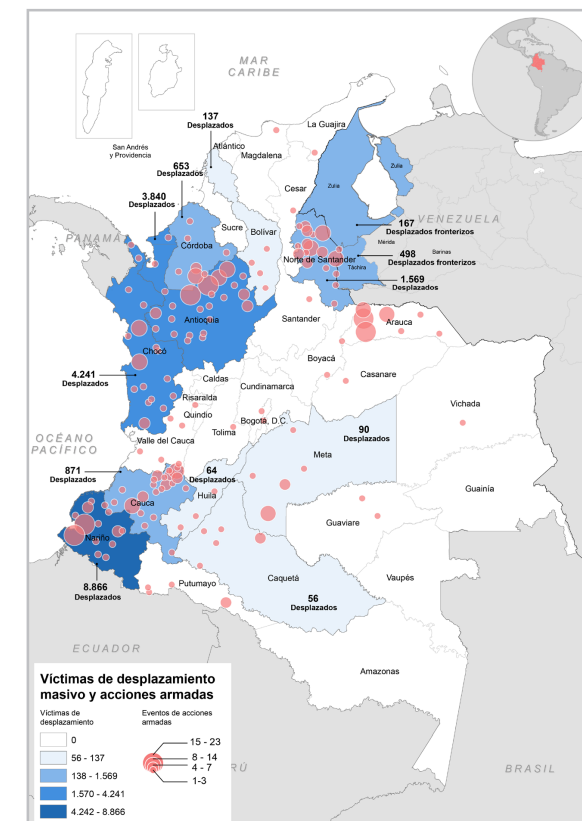
Los informes sobre la violencia contra la población civil en Colombia han aumentado en 2020. De acuerdo con las proyecciones de ACAPS, los grupos armados y las bandas criminales se han aprovechado de las medidas de contención de la COVID-19 para ampliar su control territorial y social, a menudo explotando e infligiendo violencia a las comunidades locales (ACAPS 09/09/2020). Esta violencia se concentra principalmente en zonas rurales y remotas, donde los grupos armados compiten por el control de las economías ilícitas y la presencia del Estado es débil. Los departamentos de Cauca, Meta, Putumayo, Chocó, Nariño y Antioquia son especialmente afectados (Noticias ONU 15/07/2020). Las comunidades indígenas y afrocolombianas, que suelen vivir en estas zonas afectadas por el conflicto, son particularmente vulnerables a esta violencia. Los grupos armados han atacado miembros de estos grupos por oponerse a sus actividades (CIDH 14/10/2020). Los hogares de refugiados y migrantes venezolanos también están en peligro debido a su vulnerabilidad económica y a la falta de acceso a los servicios de apoyo (FAO-PMA 10/2020). Las mujeres y las niñas enfrentan también un mayor riesgo de violencia sexual y de género (VSG) en el contexto del aumento del conflicto. Las medidas de contención de la COVID-19 dejan a muchas mujeres y niñas aisladas de los servicios de protección.

HALLAZGOS CLAVES

- Los grupos armados se han aprovechado de la pandemia para consolidar o ampliar su control sobre los territorios y las comunidades donde están presentes, lo que **ha llevado a un aumento de los niveles de conflicto entre los grupos y de violencia contra la población civil**.
- Los cierres de escuelas y la crisis económica relacionados con COVID-19 han **expuesto a los niños a mayores riesgos de protección**, incluido el reclutamiento por grupos armados.
- **Los niveles de inseguridad alimentaria han aumentado significativamente** a causa de la pérdida de ingresos relacionada a las medidas oficiales de contención por la COVID-19 y las restricciones impuestas por los grupos armados.
- **Las masacres y los asesinatos selectivos persisten en gran número**, sobre todo en las zonas con escasa presencia del Estado, con economías ilícitas y con la presencia de grupos armados.

NECESIDADES CRÍTICAS

- Las comunidades en zonas remotas y afectadas por el conflicto tienen **necesidades urgentes de protección** como resultado de las acciones de los grupos armados. Las comunidades afrocolombianas, las comunidades indígenas, los niños y los líderes sociales están particularmente en peligro (Save the Children 02/10/2020; FIP 2020).
- Las personas que son desplazadas por la violencia o afectadas por masacres están expuestas a altos niveles de trauma y **requieren apoyo psicosocial**.
- **Entre 3,3 y 3,5 millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria grave** en Colombia. Los refugiados y migrantes venezolanos se encuentran entre los que padecen mayor inseguridad alimentaria (FAO-PMA 10/2020).



Fuente: OCHA 22/11/2020

Ver mapa en tamaño completo en la página 6



OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL INFORME

En este informe se examinan las diferentes formas de violencia contra la población civil en Colombia este año. El objetivo es demostrar cómo las actividades de los grupos armados y los impactos de la COVID-19 están exponiendo a ciertos grupos poblacionales a graves riesgos de protección. En primer lugar, se describen las medidas ilegales relacionadas con la COVID-19 impuestas por los grupos armados de forma violenta. En segundo lugar, se analiza la dinámica del confinamiento y del desplazamiento forzoso. En tercer lugar, se examina el aumento del reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados. En cuarto lugar, se analizan las tendencias de las masacres (asesinatos de tres o más personas). Por último, se destaca el asesinato selectivo de líderes sociales y de activistas.

METODOLOGÍA Y LIMITACIONES

El presente informe se basa en una revisión de la literatura gris secundaria y de las fuentes de los medios de comunicación que evalúan los niveles de violencia y el impacto en la población civil durante el 2020. Está sujeto a las limitaciones y potenciales sesgos de esta literatura.

Agradecimientos: ACAPS quiere agradecer a OCHA Colombia por revisar esta nota.

VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL

La aplicación violenta de medidas de COVID-19

Los grupos armados se han aprovechado de la pandemia para consolidar o ampliar su control sobre territorios y comunidades, cometiendo violaciones de los derechos humanos y atacando a quienes se les oponen (FIP 2020; Semana 13/05/2020; Insight Crime 03/09/2020). Con el pretexto de contener la propagación del virus, han impuesto medidas de COVID-19 que son muy restrictivas e ilegales, como el cierre de negocios, bloqueos de carreteras, puntos de control, toques de queda y cuarentenas en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia (ACAPS 09/09/2020; HRW 15/07/2020; UNVMC 26/06/2020). Han aplicado violentamente esas medidas en al menos cinco de esos departamentos, atacando y matando a quienes se considera que no las cumplen (HRW 15/07/2020). Mientras que las medidas oficiales de contención aplicadas por el gobierno en marzo se levantaron el 1 de septiembre, no está claro si los grupos armados siguen aplicando sus propias restricciones.

Los grupos armados distribuyen panfletos y mensajes en las redes sociales en los que esbozan medidas y amenazas violentas a aquellos que no las obedezcan (FIP 2020; Insight Crime 03/09/2020). Al menos 30 civiles han sido asesinados por infringir estas reglas no oficiales, incluyendo niños, profesionales médicos y líderes sociales que se oponen a las medidas (HRW 15/07/2020; Save the Children 02/10/2020). 25 de estos asesinatos ocurrieron en los departamentos de Nariño y Cauca en la región suroccidental (UniAndes 20/08/2020).

En algunas zonas, los profesionales médicos también han sido amenazados y se les ha prohibido salir de sus hogares, de igual manera se han denunciado ataques contra las misiones médicas (HRW 15/07/2020). En Tumaco, Nariño, actores armados dispararon contra un vehículo médico, matando al paciente y al conductor (HRW 15/07/2020; UniAndes 20/08/2020). La estigmatización de las personas identificadas que podrían tener COVID-19 ha provocado desplazamientos forzados, justificados como medidas necesarias del distanciamiento social. Con frecuencia, estas acciones se han dirigido a grupos vulnerables, incluidos los migrantes venezolanos y las comunidades indígenas (Verdad Abierta 1/05/2020). Los grupos armados en Putumayo y Nariño han enviado amenazas de muerte a las personas que dieron positivo para COVID-19, obligándolas a abandonar la zona (Insight Crime 03/09/2020; OCHA 17/06/2020).

Estas normas han limitado aún más el acceso de las comunidades a los medios de subsistencia y a los alimentos, que ya había sido limitado como resultado de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno en todo el país. Al menos 5,1 millones de colombianos dependen del trabajo informal para satisfacer sus necesidades básicas, quienes han sufrido una

pérdida de ingresos significativa o completa (OCHA 17/06/2020). En agosto de 2020, 3,3 millones de personas se enfrentaban a la inseguridad alimentaria grave en Colombia (FAO-PMA 10/2020). En septiembre, el PMA había recibido solicitudes de asistencia alimentaria para al menos 1,3 millones de personas como resultado de las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19 (OCHA 24/09/2020; 27/08/2020). Los refugiados y los migrantes venezolanos se encuentran entre los más inseguros, con un 70% de los hogares que ya presentaban niveles severos o moderados de inseguridad alimentaria antes de la pandemia (PMA 02/2020). Esto se debe a su dependencia a los trabajos informales, las barreras para acceder a las redes de seguridad social, y la falta de redes de apoyo (FAO-PMA 10/2020). Las personas no pueden acceder a sus medios de vida ya que los grupos armados obligan a los negocios a cerrar, imponen restricciones de movimiento e imponen toques de queda extensivos (HRW 15/07/2020). Los bloqueos de carreteras y de ríos han evitado que las comunidades indígenas y otras comunidades en zonas aisladas y rurales accedan a alimentos y a medicinas esenciales (Semana 13/05/2020; Verdad Abierta 08/04/2020).

Es probable que esas amplias restricciones también aumenten el riesgo de la violencia sexual y de género, ya que las personas vulnerables

se dejan aisladas y confinadas a entornos domésticos que suelen ser muy estresantes (Cluster de Protección 21/04/2020). Después de que el gobierno pusiera en marcha una cuarentena nacional en marzo, hubo un fuerte aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres.

El confinamiento forzoso

Tanto antes como durante la cuarentena nacional impuesta por el gobierno, los grupos armados han sometido a las comunidades al confinamiento forzoso, prohibiéndoles salir de un área específica, o incluso de sus casas. Hacen cumplir estas restricciones con amenazas y violencia, incluyendo la quema de vehículos y la matanza de personas que desobedecen (Pacifista 26/02/2020). Los grupos armados utilizan esta estrategia para controlar el movimiento de las personas en las zonas donde están presentes.

Los confinamientos agravan las necesidades humanitarias al aislar a las comunidades de la asistencia humanitaria y al limitar su acceso a los alimentos, el agua, los medios de subsistencia, la atención de la salud y la educación (OCHA 26/10/2020).

Este año, más de 65.000 personas han sido víctimas del confinamiento forzoso en Colombia con 26.400 personas aún confinadas a principios de noviembre (OCHA 22/11/2020). Se trata de un aumento significativo con respecto a 2019, año en que 25.483 personas se vieron afectadas por el confinamiento forzoso en el mismo período de tiempo (OCHA 22/11/2020). La práctica se ha vuelto más común durante la pandemia, ya que los grupos armados utilizan

el pretexto de contener la propagación del virus para ejercer control social. Sin embargo, la mayoría de los confinamientos de este año tuvieron lugar antes de la aplicación de cualquier medida de la COVID-19. Más de la mitad de todos los casos (35.244) ocurrieron en febrero cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL - también llamado Los Pelusos) declararon “paros armados” en la región del Catatumbo de Norte de Santander, obligando a todos los residentes a permanecer en sus casas durante varios días (Pacifista 26/02/2020). El confinamiento también afectó 25.870 personas en el Chocó (40% del total) (OCHA 22/11/2020; Noticias ONU 15/07/2020).

El desplazamiento forzoso

Las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto siguen siendo desplazadas de manera forzosa de sus hogares como resultado de las amenazas violentas y el aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados, y entre dichos grupos y las fuerzas estatales. Entre enero y octubre de 2020, más de 21.000 personas fueron desplazadas de sus hogares.

Hubo más desplazamientos en el mismo período en 2019, con casi 25.000 personas desplazadas. Esta reducción podría estar vinculada con las restricciones de movilidad relacionadas con COVID-19 implementadas por el gobierno y los controles adicionales impuestos por los grupos armados, que han llevado a más confinamientos, pero menos movimientos de población. De hecho, el 25% de los desplazamientos en 2020 (5.215 personas) se produjeron en enero, antes de la aplicación de cualquier medida de prevención de la COVID-19 (OCHA 22/11/2020).

Casi el 75% de los desplazamientos en 2020 tuvieron lugar en sólo cuatro departamentos: Nariño, Chocó, Antioquia y Norte de Santander. El 20% de los afectados son indígenas y el 45% afrocolombianos (OCHA 22/11/2020; UNSC 25/09/2020). Estos grupos son afectados desproporcionadamente por esta forma de violencia: El 3,5% de la población colombiana es indígena y el 9,3% es afrocolombiana (IWGIA, última consulta 30/10/2020; DANE 06/11/2019). Estas comunidades

suelen vivir en zonas remotas y afectadas por el conflicto, con la presencia de economías ilícitas y grupos armados no estatales, lo que explica en parte su excesiva representación como víctimas. Sin embargo, los grupos armados también dirigen la violencia a estas comunidades, ya que a menudo se oponen al uso de sus tierras para actividades económicas ilícitas como la producción de cultivos de coca o la minería ilegal (CIDH 14/10/2020; HRW 2020). Muchas veces, las comunidades desplazadas necesitan refugio, alimentos, salud y asistencia psicosocial. Los desplazados internos en Nariño en marzo de 2020 informaron de la falta de respuesta y apoyo institucional. El acceso a las poblaciones afectadas también está restringido debido al conflicto activo en las zonas de desplazamiento (MSF 03/03/2020).



El conflicto en la región disputada del Catatumbo en Norte de Santander que tiene frontera con Venezuela se intensificó durante la cuarentena cuando el ELN trató de aumentar el control, mediante enfrentamientos contra grupos rivales y llevando a cabo ataques dirigidos contra líderes sociales y otros oponentes (*Insight Crime* 03/09/2020). Además, la recesión económica vinculada a las medidas de la COVID-19 en Colombia han impulsado a muchos migrantes venezolanos a regresar a sus hogares. Al mismo tiempo, los venezolanos están regresando a Colombia o entrando por primera vez como resultado de la reapertura de la economía y debido a que la situación en Venezuela sigue deteriorándose (*ver ACAPS* 09/09/2020). Con los cruces fronterizos formales cerrados, se ven obligados a usar trochas - puntos de cruce no oficiales en caminos remotos. Estas rutas están controladas por grupos armados que cobran tasas de paso (*Insight Crime* 24/07/2020; *ACAPS* 09/09/2020). Los migrantes que usan trochas son expuestos a riesgos de protección, como la trata de personas y la explotación sexual. Las mujeres y las niñas venezolanas están especialmente en riesgo (*Cluster de Protección* 21/04/2020).

El reclutamiento de menores por grupos armados

Los niños que viven en zonas afectadas por el conflicto tienen necesidades urgentes de protección, ya que el cierre de escuelas y la crisis económica los exponen a mayores riesgos, incluido el reclutamiento por parte de los grupos armados (*Save the Children* 02/10/2020). En la primera mitad del 2020, al menos 190 menores fueron reclutados por grupos armados, casi tantos como en todo el 2019 (200 casos), y cinco veces más (38) que el primer semestre de ese año (*TNH* 10/09/2020; *UNICEF* 28/07/2020). Es probable que las cifras reales sean más altas, ya que los casos son difíciles de rastrear y no se reportan por temor de las consecuencias (*TNH* 10/09/2020).

Tanto el ELN como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - también llamado Clan del Golfo) han reclutado de forma forzosa a niños y niñas en el Chocó, incluidos niños y niñas de las comunidades indígenas emberá y afrocolombianas (*Insight Crime* 03/09/2020; *FIP* 2020). También se han identificado casos en Antioquia y Córdoba (*OCHA* 27/08/2020). Los grupos disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) han asistido a reuniones comunitarias en Guaviare para identificar posibles reclutas (*Insight Crime* 03/09/2020; *Caracol* 13/08/2020).

La crisis económica y el cierre de escuelas relacionados con la COVID-19 hacen que los niños y niñas de las comunidades rurales y con menos recursos sean especialmente vulnerables (*Save the Children* 02/10/2020). Las medidas de cuarentena han reducido las opciones de subsistencia y las fuentes de ingresos, y muchas familias rurales se enfrentan a inseguridad alimentaria grave. Aunque el gobierno levantó la cuarentena nacional en septiembre, la contracción de la economía colombiana causada por las medidas de contención sigue afectando la capacidad de las personas para acceder a los medios de subsistencia y a los

alimentos. En este contexto, las familias pueden recurrir a mecanismos de supervivencia negativos, incluido el reclutamiento de niños y niñas y otras formas de explotación infantil (*Cluster de Protección* 21/04/2020). Los hogares de los refugiados y migrantes venezolanos también son muy vulnerables a esta forma de explotación, dada su vulnerabilidad económica, la falta de acceso a servicios de apoyo, y una situación jurídica irregular, lo que los hace menos dispuestos a denunciar problemas a las autoridades por miedo a la detención.

Algunos menores de edad son reclutados a la fuerza, pero muchos se unen para escapar de la pobreza y la falta de oportunidades, del abuso en el hogar o debido a falsas promesas de riqueza. Los grupos armados utilizan diversas estrategias de reclutamiento, como organizar fiestas, ofrecer regalos como teléfonos o ropa, y dar salarios (*Insight Crime* 28/08/2020). En Norte de Santander, el ELN utiliza las redes sociales y aplicaciones de mensajería para contactar a menores de edad y organizar fiestas para convencerlos de unirse a sus filas (*LAFM* 11/07/2020; *TNH* 10/09/2020).

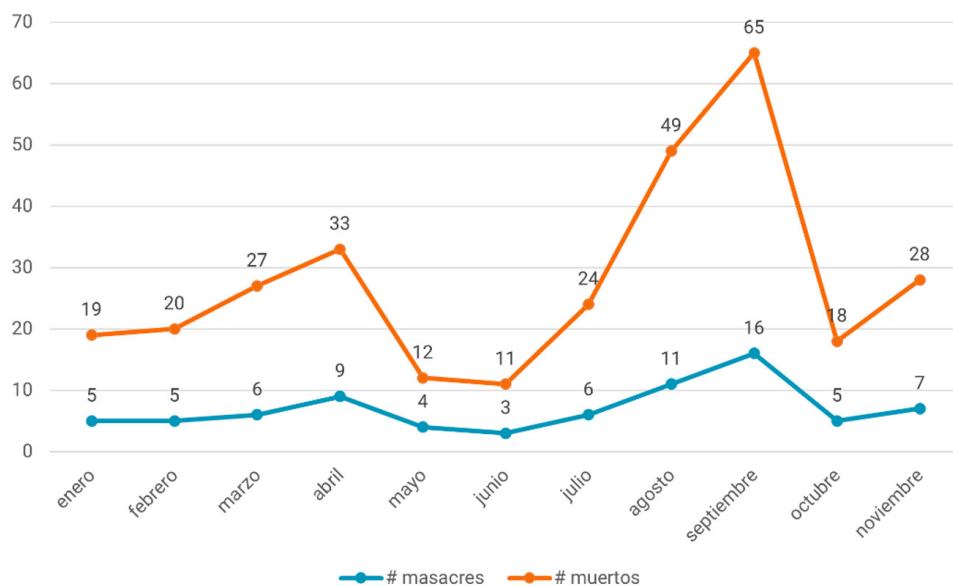
Muchos niños también han perdido el acceso a los servicios de protección y a los espacios seguros, ya que las escuelas han cerrado debido a la pandemia. Muchas veces los profesores son los primeros en identificar los signos de participación con los grupos armados y pueden tomar medidas tempranas para evitar el reclutamiento (*TNH* 10/09/2020). Los niños que viven en zonas rurales y remotas están más aislados debido a las medidas de cuarentena, lo que los hace más vulnerables al contacto y al reclutamiento por parte de los grupos armados (*Insight Crime* 28/08/2020; *OCHA* 27/08/2020). Los niños corren mayor riesgo de ser reclutados, pero las niñas también son reclutadas y afectadas por la explotación sexual (*TNH* 10/09/2020).

Masacres

Al 25 de noviembre, se habían producido 77 masacres en Colombia desde principios del año, en donde murieron 309 personas en total (*Indepaz* 22/11/2020). Aunque no hay una sola explicación para los asesinatos, se concentran en partes del país donde la presencia estatal es limitada y donde varios grupos armados compiten por el control de las economías y las rutas comerciales ilícitas (*CIDH* 14/10/2020). Las masacres son utilizadas por estos grupos para infundir miedo en las poblaciones locales y ejercer el control social (*Verdad Abierta* 17/08/2020). Los departamentos donde han ocurrido más masacres son: Antioquia (18), Cauca (12), Nariño (9) y Norte de Santander (6), que son los cuatro departamentos con mayor concentración de producción de coca (*Indepaz* 14/11/2020; *Verdad Abierta* 23/08/2020). Muchos municipios que registraron múltiples masacres se encuentran en zonas de cultivo de coca; los campesinos que participan en el programa de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno (PNIS) se han convertido en blancos de los grupos armados que se benefician del negocio de la coca (*Verdad Abierta* 23/08/2020).



Número de masacres y personas asesinadas al noviembre 25 2020



Fuente: Indepaz 22/11/2020

Las tasas totales de homicidio disminuyeron bastante en abril tras la aplicación de la cuarentena nacional, aunque las tasas de masacres siguieron aumentando (FIP 2020; Indepaz 14/11/2020). Entre julio y septiembre de 2020, 138 personas murieron en 33 masacres, más que en los seis meses anteriores juntos, y casi tanto como en todo el 2019, cuando 149 personas fueron asesinadas (Indepaz 14/11/2020; Verdad Abierta 23/08/2020). Agosto y septiembre fueron los meses más violentos, con 11 y 16 masacres registradas en las que murieron 49 y 65 personas respectivamente (Indepaz 14/11/2020).

Muchas veces los jóvenes son víctimas de esta violencia. El 11 de agosto, cinco adolescentes afrocolombianos de entre 14 y 16 años fueron torturados y asesinados en la ciudad de Cali (CIDH 14/10/2020). En Nariño, más de 20 personas fueron asesinadas en el lapso de una semana a finales de agosto. El número de muertos incluyó dos niños de camino a la escuela, y nueve personas de entre 17 y 26 años que murieron durante una reunión social, supuestamente por romper las reglas de cuarentena impuestas por un grupo armado en la zona.

La tendencia creciente de las masacres demuestra una nueva fase de conflicto después del Acuerdo de Paz y la desmovilización de las FARC-EP firmado en el 2016. Otros grupos

armados y las facciones disidentes de las FARC ahora luchan por el control del territorio dejado atrás por el grupo, y las comunidades locales sufren las consecuencias (Verdad Abierta 23/08/2020). Es probable que esta tendencia continúe ya que las intervenciones militares no logran frenar la inseguridad en las zonas rurales, ni proteger las poblaciones más vulnerables, ni abordar las desigualdades estructurales que sustentan la violencia en sus territorios.

Los asesinatos selectivos contra los líderes sociales y los activistas

Con frecuencia, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos son matados en asesinatos selectivos (Insight Crime 03/09/2020). Los grupos armados apuntan a estos líderes por oponerse a la actividad económica ilícita en sus tierras y por promover la implementación del Acuerdo de Paz, que incluye los programas de sustitución de cultivos ilícitos y de restitución de tierras (Insight Crime 18/02/2020). Al 25 de noviembre, 259 líderes sociales y 12 miembros de sus familias habían sido asesinados este año (Indepaz última consulta el 25/11/2020). 279 fueron asesinados en 2019 y 298 en 2018 (Indepaz 21/08/2020). Los ataques contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos son un problema recurrente. Entre la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 y agosto de 2020, 1.000 líderes y activistas sociales fueron asesinados (Indepaz 21/08/2020). Más del 70% de los asesinatos se produjo en las zonas rurales. El 38% de las víctimas fueron indígenas y el 10% fueron afrocolombianos (Indepaz 21/08/2020).

El brote de la COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales a los ataques. Ha provocado una desviación de la atención y de los recursos del Estado, dejando muchos sin sus habituales medidas de protección (Amnistía Internacional 08/10/2020; Guardian 08/10/2020). Además, las restricciones de movimiento relacionadas con la COVID-19 han confinado a estos líderes a sus hogares, facilitando a los grupos armados a ubicar a sus víctimas (FIP 2020). Sin embargo, enero y febrero de este año fueron los meses más letales hasta la fecha, con 34 y 32 asesinatos respectivamente. Estos asesinatos ocurrieron antes de la aplicación de las medidas de la COVID-19, lo que indica que los asesinatos están aumentando independientemente de la crisis de la COVID-19 (FIP 2020; Indepaz última consulta el 16/11/2020).

Aunque las restricciones de la COVID-19 han aumentado la vulnerabilidad de los líderes y activistas sociales, las amenazas a sus vidas no desaparecerán a medida que se levanten las medidas y el movimiento se vuelva menos restringido. Sin mejores medidas de protección, y un compromiso a la protección de los derechos de las comunidades vulnerables de Colombia, es probable que estos asesinatos continúen ocurriendo.



Desplazamientos y acciones armadas en Colombia, enero-octubre de 2020

Fuente: OCHA 22/11/2020

